



EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL
MÁLAGA
Secretaría General

DOÑA ALICIA E. GARCÍA AVILÉS, SECRETARIA GENERAL DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA.

CERTIFICO: Que según los antecedentes que obran en esta Secretaría General, a mi cargo, resulta que el Pleno de esta Excm. Diputación Provincial en sesión celebrada el día que se indica, al punto que igualmente se detalla, adoptó el acuerdo que copiado textualmente dice lo siguiente:

Punto núm. 5.3.- Sesión ordinaria del Pleno de 30-01-2017.- Asunto urgente.- Delegación de Apoyo y Atención al Municipio: Aprobación de la modificación de Estatutos del Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED "María Zambrano" de Málaga.

Por el Diputado Delegado de Apoyo y Atención al Municipio, en escrito de 13 de diciembre de 2016, se ha efectuado una propuesta relativa a la aprobación de la modificación de Estatutos del Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED "María Zambrano" de Málaga, que copiada textualmente dice:



"Atendido que con fecha de 28 de noviembre de 2016, registrado en el Registro General de la Diputación Provincial de Málaga número 2016-32310, tiene entrada el escrito remitido por el Presidente del «*Consortio Universitario del Centro Asociado a la UNED "María Zambrano" de Málaga*» (en adelante el Consorcio) con el que, en cumplimiento y a los efectos de lo establecido en los artículos 74 y 82 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, se remite Certificación del Acuerdo adoptado por la Junta Rectora del Consorcio en Sesión Extraordinaria celebrada en fecha 23 de noviembre de 2016, por el que se procede a aprobar la propuesta de nuevos Estatutos del Consorcio, y,

Resultando que mediante acuerdo adoptado por el Pleno de la Diputación Provincial en Sesión celebrada en fecha 22 de diciembre de 1975 se procedió a la creación de un Patronato benéfico-docente para el sostenimiento del Centro Asociado de la UNED en Málaga, Patronato que como consecuencia de las innovaciones legislativas producidas en su día, fue transformado en Consorcio mediante Acuerdo adoptado por el Pleno de la Diputación Provincial en Sesión celebrada en fecha 26 de mayo de 1995.

Resultando que con la propuesta ahora aprobada, se procede a la adaptación de los Estatutos actualmente vigentes, publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número 128 de fecha 4 de julio de 1996 (páginas 30 a 24 ambas inclusive), a las nuevas previsiones legales establecidas en la Ley 27/2013 de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local y a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Resultando que de conformidad con lo establecido en el artículo 74.1 y 74.2, a los que remite el artículo 82, preceptos todos ellos de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, inicialmente y sin perjuicio de lo que más adelante se expondrá, corresponde a la

Diputación Provincial pronunciarse en trámite de audiencia sobre la propuesta de Modificación de los Estatutos de los Consorcios Locales.

Resultando que más clara resulta la necesidad del pronunciamiento de la Diputación Provincial, en tanto que miembro integrante del Consorcio, respecto de la propuesta de modificación estatutaria que se examina, pronunciamiento expreso que no sólo resulta exigido por el artículo 27.4 de los Estatutos actualmente vigentes, sino además por exigirlo también el artículo 47.2 letra g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, conforme al cual es necesario el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de las corporaciones para la adopción de los acuerdos relativos a la *«Creación, modificación o disolución de mancomunidades u otras organizaciones asociativas, así como la adhesión a las mismas y la aprobación y modificación de sus estatutos»*.

Considerando que la legislación aplicable, sin perjuicio de la cita de otras disposiciones en cuanto pueda resultar necesario y/o conveniente, viene recogida en los siguientes Textos Legales: 1º Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante LRJSP). 2º Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (en adelante LRBRL). 3º Ley 5/2010 de 11 de junio de Autonomía Local de Andalucía (en adelante LAULA). 4º Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 Abril (en adelante TRRL). 5º Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (en adelante LRSAL). 7º Estatutos vigentes del «Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED «María Zambrano» de Málaga» aprobados por acuerdo adoptado por el Pleno de la Diputación Provincial en Sesión celebrada en fecha 26 de mayo de 1995 publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número 128 de fecha 4 de julio de 1996 (páginas 30 a 24 ambas inclusive).

Considerando que en fecha de 30 de diciembre de 2013 se publica en el BOE la LRSAL, cuya Disposición Final segunda modifica la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común (en cuanto resulte necesaria su nueva cita LRJ-PAC), introduciendo en la misma la nueva *Disposición adicional vigésima*, relativa al régimen jurídico de los consorcios y dando el plazo de 1 año desde la entrada en vigor de la ley para proceder a la adaptación a la misma de los estatutos de los consorcios.

Considerando que la LRSAL *modifica también la Disposición adicional duodécima de la LRBRL* relativa a las retribuciones en los contratos mercantiles y de alta dirección del sector público local así como número máximo de miembros de los órganos de gobierno de los consorcios.

Considerando que en virtud de las anteriores modificaciones, corresponde al Pleno de cada Corporación local, la clasificación en tres grupos de las entidades, que fueran vinculadas o dependientes de la misma, que integren el sector público local, lo que determinará tanto el número máximo de miembros del consejo de administración y de los órganos superiores de gobierno o administración de las entidades, en su caso, la estructura organizativa, con fijación del número mínimo y máximo de directivos, así como la cuantía máxima de la retribución total que estos puedan percibir.

Considerando que para dar cumplimiento a las anteriores disposiciones, en fecha de 21 de noviembre de 2014 el Pleno de la Diputación Provincial de Málaga adoptó acuerdo en virtud del cual aprobaba la clasificación de las entidades vinculadas o dependientes que integran el sector público de la Diputación en lo relativo al número máximo de miembros del consejo de administración y de los órganos superiores de gobierno o administración de tales entidades así como el número máximo de directivos de las mismas y sus retribuciones máximas. No



obstante lo anterior, en el caso del Consorcio que nos ocupa debemos resaltar que al no considerarse como entidad dependiente o vinculada de la Diputación Provincial no le corresponde a ésta su clasificación en alguno de los tres grupos a esta Corporación Local por lo que no fue incluido en el acuerdo plenario de 21 de noviembre de 2014.

Considerando que finalmente atendida la naturaleza del Consorcio cuya modificación estatutaria estudiamos, resulta necesario señalar que la nueva regulación de la LRSAL con el título de *«Convenios sobre ejercicio de competencias y servicios municipales»* introduce la *Disposición adicional novena* en virtud del cual se establece que *«Los convenios, acuerdos y demás instrumentos de cooperación ya suscritos, en el momento de la entrada en vigor de esta Ley, por el Estado y las Comunidades Autónomas con toda clase de Entidades Locales, que lleven aparejada cualquier tipo de financiación destinada a sufragar el ejercicio por parte de éstas últimas de competencias delegadas o competencias distintas a las enumeradas en los artículos 25 y 27 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, deberán adaptarse a lo previsto en esta Ley a 31 de diciembre de 2014. Transcurrido este plazo sin haberse adaptado quedarán sin efecto. La adaptación a las previsiones de esta Ley de los instrumentos de cooperación suscritos por las Entidades Locales para el funcionamiento de Centros Asociados de la Universidad Nacional de Educación a Distancia deberá realizarse en el plazo de tres años desde su entrada en vigor. Durante el plazo de adaptación de los instrumentos de cooperación, la financiación de las Administraciones locales a los centros asociados no se extenderá a los servicios académicos que se presten a los alumnos matriculados con posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley»*.

Considerando que en fecha de 17 de septiembre de 2014 se publica en el BOE la Ley 15/2014, en virtud de la cual se da un plazo de 6 meses desde su entrada en vigor, finalizado el 18/02/2015, para la adaptación de los estatutos de los consorcios a lo previsto en los artículos de tal norma en lo referente al derecho de separación, disolución y liquidación del consorcio.

Considerando que la legislación básica estatal aplicable en la actualidad a los consorcios viene establecida en los artículos 118 a 127 de la LRJSP, vigente desde el día 2 de octubre de 2016. En cuanto al régimen jurídico, el artículo 119 de la LRJSP determina que *«1. Los consorcios se regirán por lo establecido en esta Ley, en la normativa autonómica de desarrollo y sus estatutos»* previsión a la que el apartado 3 del mismo artículo añade que *«Las normas establecidas en la Ley 7/1985, de 2 de abril, y en la Ley 27/2013, de 21 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local sobre los Consorcios locales tendrán carácter supletorio respecto a lo dispuesto en esta Ley»*.

Considerando que en cuanto al contenido de los Estatutos de los Consorcios, el artículo 124 de la LRJSP dispone que *«Los estatutos de cada consorcio determinarán la Administración Pública a la que estará adscrito, así como su régimen orgánico, funcional y financiero de acuerdo con lo previsto en esta Ley, y, al menos, los siguientes aspectos: a) Sede, objeto, fines y funciones. b) Identificación de participantes en el consorcio así como las aportaciones de sus miembros. A estos efectos, en aplicación del principio de responsabilidad previsto en el artículo 8 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, los estatutos incluirán cláusulas que limiten las actividades del consorcio si las entidades consorciadas incumplieran los compromisos de financiación o de cualquier otro tipo, así como fórmulas tendentes al aseguramiento de las cantidades comprometidas por las entidades consorciadas con carácter previo a la realización de las actividades presupuestadas. c) Órganos de gobiernos y administración, así como su composición y funcionamiento, con indicación expresa del régimen de adopción de acuerdos. Podrán incluirse cláusulas que contemplen la suspensión temporal del derecho de voto o a la participación en la formación de los acuerdos cuando las Administraciones o entidades consorciadas incumplan manifiestamente sus obligaciones para con el consorcio, especialmente en lo que se refiere a los compromisos de financiación de las actividades del mismo. d) Causas de disolución»*.



Considerando que el objeto del Consorcio se establece en el artículo 8 letra a) del texto de la Modificación de Estatutos que se examina disponiendo que *«El Consorcio tiene por objeto el sostenimiento económico del Centro Asociado de la UNED de Málaga, como unidad de la estructura académica de la UNED, a fin de servir de apoyo a la Enseñanza Superior y a colaborar al desarrollo cultural del entorno, así como otras actividades directamente relacionadas con los objetivos antes expresados que acuerde su Junta Rectora»*.

Considerando que la doble vertiente del objeto del Consorcio, educativa y cultural, pone de manifiesto que la participación de la Diputación provincial en el ente Consorcial supone el desarrollo de una competencia, que tras la publicación de la LRSAL viene a ser configurada como distinta de las competencias propias (artículo 25 y 36 de la LRBRL) y de las que en su caso puedan ser atribuidas por delegación.

Considerando que atendido el marco de actuación de los centros asociados de la UNED, la actividad de los mismos se centra fundamentalmente en el desarrollo territorial de las actividades propias universitarias, sin perjuicio de que adicionalmente desarrollen otras actividades (desarrollo y promoción de la cultura) que pudieran ser consideradas como ejercicio de competencias propias de las entidades locales, contempladas en cuanto a los municipios en el artículo 25.2.m) de la LRBRL y respecto de las Diputaciones provinciales en los artículos 36.1.c) en cuanto que el carácter local del servicio público pueda ostentar carácter supramunicipal, y más concretamente en el artículo 15.3 de la LAULA, en cuanto pueda afectar a instituciones culturales de interés provincial.



Considerando que en la medida en que la participación de la Diputación en el Consorcio puede incidir en ámbitos competenciales que desde la promulgación de la LRSAL no pueden considerarse como propios de la corporación provincial, la participación en el Consorcio, al implicar el ejercicio de una competencia que no propia ni atribuida por delegación, debería articularse bajo los principios que establece el artículo 7.4 de la LRSAL precepto que cierra el sistema de atribución competencial a las entidades locales permitiendo que éstas puedan desarrollar competencias no propias ni atribuidas por delegación cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal, de acuerdo con las determinaciones de la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, y no se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra Administración Pública.

Considerando que aunque no es objeto ahora profundizar ni pronunciarse respecto a si la participación en el Consorcio es fruto del ejercicio de una competencia propia o no, debe recordarse que la participación de la Diputación viene realizándose desde que en 1975 se constituyese el Patronato benéfico-docente para el sostenimiento del Centro Asociado de la UNED en Málaga, y la participación en el Consorcio se viene realizando desde que el mencionado Patronato se transformase en Consorcio mediante Acuerdo adoptado por el Pleno de la Diputación Provincial en Sesión celebrada en fecha 26 de mayo de 1995, no se trata pues de la participación ni del ejercicio de competencias que, conforme a la legislación actualmente vigente, deberían calificarse como no propias ni atribuidas por delegación.

Considerando que en tal sentido debemos señalar que el Decreto-ley 7/2014, de 20 de mayo, de la Consejería de Administración Local y relaciones Institucionales, mediante el que se establecen medidas Urgentes para la aplicación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local establece en su artículo 1 dispone en relación con el ejercicio por parte de las Entidades Locales de competencias atribuidas por la legislación autonómica anterior a la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local que *«Las competencias atribuidas a las entidades locales de Andalucía por las leyes anteriores a la entrada en vigor*

de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, se ejercerán por las mismas de conformidad a las previsiones contenidas en las normas de atribución, en régimen de autonomía y bajo su propia responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local» y que el artículo 2.3 del mismo Decreto-ley en relación con los informes que establece el nuevo artículo 7.4 de la LRBRL para el ejercicio de competencias que, conforme a la nueva regulación deban ser calificadas como no propias ni atribuidas por delegación, dispone que «No será necesaria la solicitud de los informes.../... en el supuesto de que se vinieran ejerciendo dichas competencias, con anterioridad a la entrada en vigor de la citada Ley 27/2013, de 27 de diciembre, en virtud del artículo 8 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, y del artículo 28 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, antes de su supresión por la Ley 27/2013.../... en cuyo caso se podrán seguir prestando los servicios o desarrollando las actividades que se llevaban a cabo, siempre que, previa valoración de la propia entidad local, no incurran en supuestos de ejecución simultánea del mismo servicio público y cuenten con financiación a tal efecto», previsión normativa que ha de completarse con la contenida en el acuerdo de 18 de febrero de 2015, de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía en relación con el Decreto-ley 7/2014, de 20 de mayo, por el que se establecen medidas urgentes para la aplicación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local a cuyo tenor y «en relación con las discrepancias manifestadas sobre el artículo 2 del Decreto-ley 7/2014.../... ambas partes confirman que tanto este artículo como el artículo 7.4 de la Ley 7/1985.../... deben ser interpretados en el sentido de que el ejercicio por las entidades locales de competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación, solo cabe cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad del conjunto de la Hacienda Municipal, en los términos de la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y no se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra Administración Pública.../... requisitos [que] operan tanto para las competencias distintas de las propias y de las delegadas que estuviesen ejerciendo las entidades locales en el momento de la entrada en vigor de la Ley como para las que se puedan iniciar a partir de ese momento» adicionalmente a lo cual, según el mencionado acuerdo «las partes consideran que la continuidad en el ejercicio por las Entidades Locales de las competencias recogidas en el artículo 2.2 último inciso, y en los apartados 3 y 4 del mismo artículo del Decreto-ley 7/2014.../... exigirá el cumplimiento de los requisitos aludidos en el apartado anterior, aspectos por los que corresponde velar a cada entidad local».



Considerando que de lo anterior cabe colegir que pueden seguir desarrollándose las competencias para cuyo ejercicio la Diputación decidió en su día participar en el Consorcio siempre y cuando dicho ejercicio no incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra Administración Pública, ni se ponga en riesgo la sostenibilidad de la hacienda local, requisitos ambos de cuyo cumplimiento debe velar a la corporación provincial.

Considerando que el procedimiento aplicable para la adaptación y modificación de los Estatutos de los diferentes Consorcios, está regulado en la LAULA, concretamente en los artículos 82 y 74. El artículo 82 del referido texto legal, con el título de «Modificación de estatutos, adhesión, separación y disolución del consorcio» e insertado en la Sección 2ª (Consorcios locales), del Capítulo II (Entidades e instrumentos para la cooperación), del Título V (La cooperación territorial), remite, en cuanto a la modificación de los estatutos de los consorcios, a lo dispuesto para las mancomunidades estableciendo que «Para la modificación de los estatutos del consorcio, adhesión y separación de sus miembros, disolución y liquidación, se estará a lo dispuesto en la presente ley para las mancomunidades, sin perjuicio de las particularidades derivadas de la naturaleza de los

distintos entes consorciados» por su parte el artículo 74.1 del mismo texto legal establece que «La modificación de los estatutos se regirá por lo previsto en los mismos, que deberá respetar, en todo caso, lo establecido en la presente ley» y en el artículo 74.2 se añade «La iniciativa para la modificación de los estatutos podrá partir de cualquiera de los municipios mancomunados o del órgano de gobierno de la mancomunidad, y su aprobación corresponderá, en todo caso, al órgano de representación municipal. En su procedimiento serán trámites obligatorios el sometimiento a información pública por plazo mínimo de un mes y la audiencia a las diputaciones provinciales afectadas para que la informen en plazo no inferior a un mes».

Considerando que sin embargo, debe tenerse en cuenta que en relación con el procedimiento para la aprobación de los Estatutos de los Consorcios, que ha de venir precedido de la aprobación del oportuno Convenio por el que se acuerda la creación del ente, el artículo 80.2 de la LAULA señala que *«En todo caso, el proyecto de estatutos deberá ser sometido a información pública por un plazo mínimo de un mes y se remitirá a las diputaciones provinciales afectadas, si no fueran parte del convenio fundacional, para que lo informen en el mismo plazo de un mes».*

Considerando que en relación con el procedimiento para la modificación de sus Estatutos, en los actualmente vigentes para el Consorcio que estudiamos, su artículo 27 (de la Modificación del Consorcio) apartado 4º (Procedimiento para la modificación de los Estatutos) dispone que *«Para la modificación de los Estatutos del Consorcio será necesaria la presentación de propuesta razonada a la Junta Rectora y que sea aprobada por dos tercios de sus miembros, y además que dicho acuerdo sea ratificado por todas y cada una de las Entidades que integran el Consorcio».*

Considerando que respecto de la documentación remitida por el Consorcio, la misma se contrae al escrito al que se acompaña la Certificación suscrita por el Secretario del Consorcio, manifestando tan sólo que la propuesta que se remite ha sido aprobada por la Junta Rectora del Consorcio en sesión extraordinaria y urgente celebrada en fecha 23 de noviembre de 2016, ninguna precisión contiene la Certificación, ni el escrito con el que la misma se remite, respecto al cumplimiento o no de los trámites procedimentales preceptivos, ni si los Estatutos se han aprobado o no con el quórum que prescriben los Estatutos actualmente vigentes (artículo 27 apartado 4º). En cualquier caso, es una cuestión que corresponde analizar y sobre la que en último extremo corresponde pronunciarse a los propios órganos administrativos del Consorcio, a la vista de su régimen jurídico y de su reglamento de régimen interno, y en caso de que la formación de voluntad del órgano competente (Junta Rectora) adolezca de algún vicio procedimental (ausencia del quórum requerido, ausencia de informes preceptivos), anudar a los posibles incumplimientos las consecuencias legalmente establecidas.

Considerando que al margen de lo expuesto, el Consorcio que analizamos tiene naturaleza administrativa aunque no puede calificarse propia, exclusiva y estrictamente como un Consorcio Local, pues si nos atenemos al ámbito de las competencias que el Consorcio está llamado a ejercitar, las mismas no pueden ser calificadas como exclusivamente locales porque más propiamente tanto la competencias «educativas» como las competencias en materia de «universidades», o son estatales o son autonómicas.

Considerando que la regulación vigente en materia de consorcios en tanto que fuerza a la adscripción del ente consorcial a alguna de las administraciones públicas que formen el consorcio (artículo 124.1 LRJSP) con sujeción a los criterios de preferencia que se establecen (artículo 124.2 LRJSP), y en desarrollo de esta normativa la propia propuesta de Estatutos que analizamos (artículo 4) adscriben el consorcio a la UNED formando parte del sector público institucional, y concretamente del sector público institucional del estado, tal como establece el artículo 84.1.g) de la LRJSP, al tratarse de una universidad no transferida. Esta adscripción



determina asimismo el régimen jurídico aplicable al Consorcio, por ende a sus actos y a su contenido normativo, los estatutos que analizamos, dicho lo cual ha de añadirse que nada establece ni la normativa estatal básica aplicable, ni la normativa autonómica, respecto a cuál deba ser el procedimiento para la aprobación de la modificación de los Estatutos.

Considerando que desde otro punto de vista, la regulación contenida en materia de consorcios en la LAULA, sin perjuicio de su aplicación con carácter supletorio, no resultaría de aplicación al consorcio pues esta regulación reserva su aplicación los Consorcios Locales, tal como encabeza la Sección 2ª (Consorcios locales), del Capítulo II (Entidades e instrumentos para la cooperación), del Título V (La cooperación territorial), de la LAULA. A pesar de todo lo expuesto, lo cierto es que los estatutos todavía vigentes en defecto de lo que de forma expresa establezcan los estatutos, somete su régimen jurídico a las normas aplicables de la LRBRL, lo que unido a la aplicación del elemental y asentado principio general de *«contrarius actus»* obliga a considerar que la nueva disposición derogatoria o modificatoria deba someterse procedimentalmente a los mismos trámites que los que en su día sirvieron para su aprobación. Conforme a lo señalado, aunque una primera impresión llevaría a concluir que la remisión del artículo 82 de la LAULA al artículo 74, en cuanto se refiere al procedimiento para la aprobación de la modificación que examinamos, debe incluir todos los trámites que éste último artículo establece como obligatorios, lo cierto es que la reseñada remisión se realiza por el artículo 82 *«sin perjuicio de las particularidades derivadas de la naturaleza de los distintos entes consorciados»*, llegados a éste punto es cierto que el artículo 74.2 de la LAULA (por expresa remisión del 82) dispone que en el procedimiento *«serán trámites obligatorios el sometimiento a información pública por plazo mínimo de un mes y la audiencia a las diputaciones provinciales afectadas para que la informen en plazo no inferior a un mes»*, intervención de las corporaciones provinciales en trámite de audiencia que aunque resulta lógica cuando se trate de Mancomunidades, pues éste tipo de entidades de cooperación se reserva sólo para los municipios, resultaría innecesario para el caso de los Consorcios cuando del Convenio fundacional de los mismos haya formado o forme parte la Diputación provincial, tal como por otro lado contempla de forma expresa el artículo 80.2 de la misma ley, cuando a propósito de la aprobación de los estatutos del Consorcio dispone que en todo caso el proyecto deba someterse a información pública y remitirse a las diputaciones provinciales afectadas para que lo informen en el mismo plazo de un mes, sólo en el caso de que dichas diputaciones no fueran parte del convenio fundacional, lo que a sensu contrario lleva a concluir que cuando si hubieran formado parte del convenio fundacional participando como miembro del Consorcio, ésta remisión a la Diputación para que informe el proyecto no resulta obligada ya que la entidad provincial, en tanto que miembro del Consorcio tiene oportunidad de pronunciarse en el trámite de aprobación de la propuesta, en su calidad de miembro del Consorcio.

Considerando que lo expuesto nos lleva a considerar que en el procedimiento para la aprobación de la propuesta de modificación que analizamos, resultarán trámites obligados: 1) la realización de una propuesta razonada a la Junta Rectora; 2) la aprobación de la propuesta por dicho órgano con el quórum de los dos tercios de sus miembros; 3) El sometimiento de la propuesta al trámite de información pública; 4) La ratificación (aprobación) de dicha propuesta por todas las entidades que forman parte del Consorcio, 5) La aprobación definitiva y su remisión a la Junta de Andalucía y a la Administración del Estado para su registro y, 6) Publicación de la modificación acordada en el Boletín Oficial del Estado.

Considerando que para concluir resultando necesario el pronunciamiento de la Diputación Provincial en relación con la propuesta de modificación de los Estatutos que se realiza, atendido que ésta Corporación es miembro del mencionado ente, el Pleno de la Diputación Provincial es el órgano competente para la aprobación inicial de la propuesta de modificación de los Estatutos toda vez que el artículo 47.2.g) de la LRBRL, requiere el *voto favorable de la mayoría absoluta* del número de los miembros de la corporación local, para la *«creación,*



modificación o disolución de mancomunidades u otras organizaciones asociativas, así como la adhesión a las mismas y la aprobación y modificación de sus estatutos», correspondiendo, en todo caso al Pleno de la Corporación, según dispone el artículo 33.2.ñ) de la LRBRL «Aquellas atribuciones que deban corresponder al Pleno por exigir su aprobación una mayoría especial», resultando necesario que en el procedimiento consten incorporados al Expediente de los Informes de la Secretaría General y de la Intervención General de la Diputación Provincial de Málaga, informes que resultan preceptivos tal como dispone el artículo 54.1.b) del TRRL para la adopción de acuerdos en materias cuya aprobación exija un quórum especial.

Considerando que respecto a la propuesta de modificación de los estatutos del consorcio, como hemos señalado anteriormente, el artículo 124 de la LRJSP dispone que *«Los estatutos de cada consorcio determinarán la Administración Pública a la que estará adscrito, así como su régimen orgánico, funcional y financiero de acuerdo con lo previsto en esta Ley, y, al menos, los siguientes aspectos: a) Sede, objeto, fines y funciones. b) Identificación de participantes en el consorcio así como las aportaciones de sus miembros. A estos efectos, en aplicación del principio de responsabilidad previsto en el artículo 8 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, los estatutos incluirán cláusulas que limiten las actividades del consorcio si las entidades consorciadas incumplieran los compromisos de financiación o de cualquier otro tipo, así como fórmulas tendentes al aseguramiento de las cantidades comprometidas por las entidades consorciadas con carácter previo a la realización de las actividades presupuestadas. c) Órganos de gobiernos y administración, así como su composición y funcionamiento, con indicación expresa del régimen de adopción de acuerdos. Podrán incluirse cláusulas que contemplen la suspensión temporal del derecho de voto o a la participación en la formación de los acuerdos cuando las Administraciones o entidades consorciadas incumplan manifiestamente sus obligaciones para con el consorcio, especialmente en lo que se refiere a los compromisos de financiación de las actividades del mismo. d) Causas de disolución».*

Considerando que de conformidad con lo anterior, la propuesta de modificación que se examina determina en su artículo 4 que el Consorcio quedará adscrito a la UNED formando parte, a través de ésta universidad, del sector público institucional, estableciendo y regulando asimismo la propuesta el régimen orgánico y funcional en su Capítulo II (artículos 12 a 15 inclusive), regulación que se completa con la contenida en el Capítulo IV (artículos 21 a 25 ambos inclusive) relativos a los órganos de administración del Centro, estableciendo asimismo el régimen financiero del consorcio de conformidad con las previsiones de la legislación básica y regulándolo en su Capítulo 3 (artículos 16 a 19 ambos inclusive).

Considerando que en cuanto al contenido mínimo que obligatoriamente ha de contemplar los Estatutos, la Sede del consorcio se establece en el artículo 9 (domicilio social), el objeto, fines y funciones del ente consorcial se determinan en el artículo 8, letra a) por cuanto se refiere al objeto, letra b) en relación con los fines y letra c) respecto a las funciones.

Considerando que la identificación de los participantes se establece en el artículo 1; los distintos órganos de gobierno y administración del Consorcio así como su composición, funcionamiento y régimen de adopción de acuerdos aparecen regulados en los artículos 12 a 15 (Capítulo 2), ambos inclusive por cuanto se refiere a los órganos de gobierno, su composición, funcionamiento y régimen de adopción de acuerdos, y en los artículos 20 a 25 (Capítulo 4), ambos inclusive en relación con los órganos de administración del centro, y sus funciones, regulación que se completa con la establecida en los artículos 26 a 31 (Capítulo 5) ambos inclusive, relativos, dado el singular objeto del Centro, a su régimen académico.

Considerando que a pesar de no constituir un contenido mínimo obligatorio conforme establece la LRJSP, los Estatutos que se examinan completan su regulación contemplando las



necesarias referencias al régimen de separación y disolución del Consorcio regulación que en cualquier caso habrá de completarse con la contenida en los correspondientes artículos de la LRJSP, así artículo 125 en relación con las causas y procedimiento para el ejercicio del derecho de separación del consorcio, artículo 126 en cuanto a los efectos del ejercicio del derecho de separación y artículo 127 en relación con la disolución del consorcio.

Considerando que dada la naturaleza jurídica del consorcio, mixta, local y estatal y jurídicamente adscrita al sector público institucional estatal y por tanto con un régimen jurídico regido en primer término por la legislación básica estatal y por la normativa sectorial que resulte aplicación atendida su concreta naturaleza, la propuesta modificada del texto de los Estatutos que se examina, en general cumple con los requerimientos legales.

Considerando que no obstante lo anterior, el completo cumplimiento de la normativa básica estatal, en cuanto a las determinaciones mínimas que el artículo 124 de la LRJSP establece que ha contener los estatutos de los consorcios, exige que se complete la propuesta con las previsiones que prescribe la LRJSP en su artículo 124, letra b), inciso 2º en cuanto dispone que *«en aplicación del principio de responsabilidad previsto en el artículo 8 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, los estatutos incluirán cláusulas que limiten las actividades del consorcio si las entidades consorciadas incumplieran los compromisos de financiación o de cualquier otro tipo, así como fórmulas tendentes al aseguramiento de las cantidades comprometidas por las entidades consorciadas con carácter previo a la realización de las actividades presupuestadas»*. Recuérdese que el artículo 8 de la Ley Orgánica 2/2012 desarrollando el principio de responsabilidad [financiera] dispone que *«1. Las Administraciones Públicas que incumplan las obligaciones contenidas en esta Ley, así como las que provoquen o contribuyan a producir el incumplimiento de los compromisos asumidos por España de acuerdo con la normativa europea o las disposiciones contenidas en tratados o convenios internacionales de los que España sea parte, asumirán en la parte que les sea imputable las responsabilidades que de tal incumplimiento se hubiesen derivado. En el proceso de asunción de responsabilidad a que se refiere el párrafo anterior se garantizará, en todo caso, la audiencia de la administración o entidad afectada. 2. El Estado no asumirá ni responderá de los compromisos de las Comunidades Autónomas, de las Corporaciones Locales y de los entes previstos en el artículo 2.2 de esta Ley vinculados o dependientes de aquellas, sin perjuicio de las garantías financieras mutuas para la realización conjunta de proyectos específicos. Las Comunidades Autónomas no asumirán ni responderán de los compromisos de las Corporaciones Locales ni de los entes vinculados o dependientes de estas, sin perjuicio de las garantías financieras mutuas para la realización conjunta de proyectos específicos»*.

Considerando que los estatutos que se analizan, contemplan en su artículo 16 el régimen de financiación del Consorcio disponiendo en relación con la financiación ordinaria procedente de la UNED, apartado 3, inciso 2º que *«Esta financiación, de conformidad con el artículo 2.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, no estará incluida en el ámbito de aplicación de dicha ley»* para a continuación en su apartado 4 relativo a la financiación ordinaria procedente del resto de entidades consorciadas, expone en su párrafo 2º, inciso 1º que *«Las subvenciones contempladas en ésta estipulación deberán hacerse efectivas al inicio del ejercicio presupuestario...»*, utilización de la expresión «subvención» para calificar las aportaciones del resto de entidades consorciadas que introducen un elemento distorsionador en cuanto a la naturaleza jurídica de las mencionadas aportaciones induciendo a pensar que las mismas quedan sujetas a las previsiones establecidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Considerando que al respecto debe recordarse que el artículo 2 de la Ley 38/2003, general de subvenciones, delimita el concepto de subvención, estableciendo en su apartado 1 *«Se entiende por subvención, a los efectos de esta ley, toda disposición dineraria realizada por*



cualquiera de los sujetos contemplados en el artículo 3 de esta ley, a favor de personas públicas o privadas, y cumpla los siguientes requisitos: a) Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios. b) Que la entrega está sujeta al cumplimiento de un proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un comportamiento singular, ya realizado o por desarrollar, o la concurrencia de una situación, teniendo que cumplir el beneficiario las obligaciones materiales y formales que se hayan establecido. c) Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad pública». Por su parte el artículo 3.1 de la Ley General de Subvenciones establece que a los efectos de dicha ley se entiende por Administraciones públicas «a) La Administración General del Estado. b) Las entidades que integran la Administración local. c) La Administración de las comunidades autónomas» añadiendo en su apartado 2 que «Deberán asimismo ajustarse a esta ley las subvenciones otorgadas por los organismos y demás entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones públicas en la medida en que las subvenciones que otorguen sean consecuencia del ejercicio de potestades administrativas». Según la exposición de motivos de la Ley 38/2003, general de subvenciones, el elemento diferenciador que delimita el concepto de subvención de otros análogos, es «la afectación de los fondos públicos entregados al cumplimiento de un objetivo, la ejecución de un proyecto específico, la realización de una actividad o la adopción de un comportamiento singular». Asimismo, el artículo 2 apartado 2 de la Ley General de Subvenciones dispone que «No están comprendidas en el ámbito de aplicación de esta ley las aportaciones dinerarias entre diferentes Administraciones públicas, para financiar globalmente la actividad de la Administración a la que vayan destinadas, y las que se realicen entre los distintos agentes de una Administración cuyos presupuestos se integren en los Presupuestos Generales de la Administración a la que pertenezcan, tanto si se destinan a financiar globalmente su actividad como a la realización de actuaciones concretas a desarrollar en el marco de las funciones que tenga atribuidas, siempre que no resulten de una convocatoria pública».

Considerando que a los efectos de la determinación de la naturaleza jurídica de las aportaciones que deba realizar la diputación provincial y otros entes locales al consorcio que estudiamos resulta también pertinente recordar que el Documento 4 de los Principios Contables Públicos elaborado por la Comisión de Principios y Normas Contables Públicas, bajo el título de «Transferencias y subvenciones», establece como elemento diferenciador entre las transferencias y las subvenciones, la finalidad para la que se conceden y en éste sentido señala que «Las subvenciones están afectadas a un fin, propósito, actividad o proyecto específico, mientras que las transferencias financian operaciones o actividades no singularizadas». El mismo documento define los conceptos de transferencia y de subvención señalando que por transferencia debe entenderse «cualquier desplazamiento patrimonial que tiene por objeto una entrega dineraria o en especie entre los distintos agentes de las Administraciones Públicas, y de éstas a otras entidades públicas o privadas y a particulares, así como las realizadas por éstas a una Administración Pública, todas ellas sin contrapartida directa por parte de los beneficiarios, destinándose estos fondos a financiar operaciones o actividades no singularizadas» mientras que el término de subvención implica «todo desplazamiento patrimonial que tiene por objeto una entrega dineraria o en especie entre los distintos agentes de las Administraciones Públicas, y de éstas a otras entidades públicas o privadas y a particulares, así como las realizadas por éstas a unas Administraciones Públicas, todas ellas sin contrapartida directa por parte de los entes beneficiarios; afectada a un fin, propósito, actividad o proyecto específico; con obligación por parte del destinatario de cumplir las condiciones y requisitos que se hubieran establecido, o en caso contrario, proceder a su reintegro».

Considerando que por lo expuesto resulta oportuno sugerir que en aras a la mayor claridad de la naturaleza jurídica de las aportaciones económicas que en concepto de financiación para el



funcionamiento ordinario del consorcio deban transferir el resto de entidades consorciadas, el artículo 16 apartado 4 párrafo 2º, inciso 1º se modifique con la siguiente redacción *«Las aportaciones económicas en ésta estipulación deberán hacerse efectivas al inicio del ejercicio presupuestario...»*.

VISTA la propuesta de Modificación de los Estatutos del *Consortio Universitario del Centro Asociado a la UNED “María Zambrano” de Málaga*, el Pleno de la Diputación Provincial acuerda aprobar la propuesta de Modificación de los Estatutos remitida con escrito de fecha 23 de noviembre de 2016, registrado en el Registro General de la Diputación Provincial de Málaga en fecha 28 de noviembre de 2016 y número 2016-32310, en el que consta la *Certificación del Acuerdo adoptado por la Junta Rectora del Consorcio en Sesión Extraordinaria celebrada en fecha 23 de noviembre de 2016*, el Expediente tramitado en el que constan el informe emitido por la Servicio al que está adscrita la tramitación del Expediente, emitido con fecha 12 de diciembre de 2016, el resto de informes que al Expediente se incorpora, la legislación aplicable y las competencias que se atribuyen a la Diputación Provincial se propone la adopción de los siguientes ACUERDOS:

a) En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 47.2,g) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y de conformidad con lo establecido y requerido por el artículo 27 apartado 4º de los vigentes Estatutos del *Consortio Universitario del Centro Asociado a la UNED “María Zambrano” de Málaga*, el Pleno de la Diputación Provincial acuerda aprobar la propuesta de Modificación de los Estatutos remitida con escrito de fecha 23 de noviembre de 2016, registrado en el Registro General de la Diputación Provincial de Málaga en fecha 28 de noviembre de 2016 y número 2016-32310, en el que consta la *Certificación del Acuerdo adoptado por la Junta Rectora del Consorcio en Sesión Extraordinaria celebrada en fecha 23 de noviembre de 2016*, por el que se procede a aprobar la propuesta de nuevos Estatutos del Consorcio, nueva propuesta de Estatutos cuyo tenor literal es el que consta en la *Certificación* remitida y que por economía procedimental se da aquí por reproducida.

b) No obstante lo anterior, la Junta Rectora del Consorcio deberá considerar la conveniencia de que para la mayor claridad de la naturaleza jurídica de las aportaciones que deban realizar al Consorcio el resto de miembros administraciones públicas participantes en la redacción final del artículo 16 apartado 4 párrafo 2º, inciso 1º del texto remitido, se modifique sustituyendo la expresión *«Las Subvenciones...»* por la expresión *«Las aportaciones económicas ...»*, con lo que el artículo 16 apartado 4 párrafo 2º, inciso 1º quedaría con la siguiente redacción *«Las aportaciones económicas en ésta estipulación deberán hacerse efectivas al inicio del ejercicio presupuestario...»*.

c) Advertir a la Junta Rectora del Consorcio que el completo cumplimiento de las previsiones del artículo 124 letra b) inciso 2º de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, exige bien la inclusión de una cláusula en virtud de la cual se limiten las actividades del consorcio si las entidades consorciadas incumplieran sus compromisos de financiación o de cualquier otro tipo, así como fórmulas tendentes al aseguramiento de las cantidades comprometidas por las entidades consorciadas con carácter previo a la realización de las actividades presupuestadas, o bien la justificación, de la innecesariedad de dicha inclusión.

d) Comunicar los presentes acuerdos al Área de Apoyo y Atención a los Municipios, Servicio Provincial de Asistencia a los Municipios (SEPRAM), para su conocimiento y efectos oportunos y para su traslado al *Consortio Universitario del Centro Asociado a la UNED “María Zambrano” de Málaga*, a los efectos legalmente establecidos.”



A continuación se transcriben los nuevos Estatutos del Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED “María Zambrano” de Málaga.

“ESTATUTOS DEL CONSORCIO UNIVERSITARIO
CENTRO ASOCIADO A LA UNED “MARÍA ZAMBRANO” EN MÁLAGA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Vigente el Decreto 2310/72 de 18 de agosto, por el que se crea la Universidad Nacional de Educación a Distancia, se aprueba por Acuerdo de Pleno de 22 de diciembre de 1975 de la Excm. Diputación Provincial de Málaga un Patronato Benéfico para el sostenimiento del Centro Asociado de la UNED, así como sus Estatutos.

Consolidado el funcionamiento del Centro fruto de los reiterados convenios con esta Universidad y ante la necesidad de modificar los Estatutos para su adaptación a la Ley de Bases de Régimen Local en su redacción actual, así como la conveniencia de integración en la red básica de centros, se procede a la disolución del anterior Patronato y a la creación del actual Consorcio mediante la aprobación de los Estatutos que venían rigiendo (BOP 4 de julio de 1996).

Los cambios operados por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local; la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de Racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa; y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, han incidido muy significativamente en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y en el Real Decreto 1317/1995, de 21 de julio, sobre régimen de convenios de la UNED con los Centros Asociados a la misma y normas concordantes hasta hacer inexcusable -en desarrollo de la disposición adicional novena de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre- introducir las modificaciones en los Estatutos del Consorcio, de acuerdo a lo ya establecido en la Adenda aprobada por Acuerdo de 4 de noviembre de 2014 entre la Presidencia de este Consorcio y el Sr. Rector Magnífico de la UNED. En su virtud, se acuerda dotar a dicho Consorcio de los siguientes

ESTATUTOS

CAPÍTULO 1. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Composición del Consorcio. El Consorcio está constituido por:

- La Excm. Diputación de Málaga.
- El Excmo. Ayuntamiento de Málaga
- Fundación Bancaria Unicaja.
- La Universidad Nacional de Educación a Distancia
- Aquellas otras entidades que puedan en el futuro incorporarse al mismo.

Artículo 2. Denominación. La Entidad pública que se constituye recibirá el nombre de Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED “María Zambrano” de Málaga.

Artículo 3. Naturaleza. El presente Consorcio es una entidad de derecho público dotada de personalidad jurídica propia y diferenciada y de la capacidad de obrar que se requiera para la realización de sus objetivos, constituida por las administraciones y entidades indicadas en el artículo 1 conforme al Real Decreto 1317/1995, de 21 de julio, sobre régimen de convenios de la UNED con los Centros Asociados a la misma.

Artículo 4. Adscripción. De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional vigésima, párrafo 2, letra f), de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en redacción dada por la disposición final segunda de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y en el artículo 120 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que lo reproduce y sustituye a partir del 2 de octubre de 2016, el Consorcio quedará adscrito a la UNED.



Artículo 5. Régimen jurídico general. Consecuentemente con la adscripción indicada en el apartado anterior, y por cuanto le sea de aplicación conforme a los artículos 2.2 c) y 84.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, este consorcio:

- a) Forma parte, a través de la UNED, del sector público institucional.
- b) Se clasifica como del sector público administrativo a efectos del artículo 3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
- c) Se regirá por la normativa universitaria y, supletoriamente y en cuanto no se oponga a ella, por la ley 40/2015, de 1 de octubre, y resto de disposiciones que sobre procedimientos y régimen jurídico se contienen en la legislación estatal; en su caso, por la legislación de Régimen Local; y por los demás preceptos que sean de aplicación, incluyéndose, a estos efectos, el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro Asociado.

Artículo 6. Régimen de impugnación de actos. Los actos del Consorcio serán impugnables ante los tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa salvo que, por la naturaleza concreta del acto de que se trate, sea de aplicación otra instancia o jurisdicción.

Artículo 7. Duración. La duración del Consorcio será por tiempo indefinido.

Artículo 8. Objeto, fines y funciones del Consorcio. De acuerdo a lo previsto en el artículo 124 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el Consorcio tiene el objeto, fines y funciones que a continuación se relacionan:

- a) Objeto. El Consorcio tiene por objeto el sostenimiento económico del Centro Asociado de la UNED de Málaga, como unidad de la estructura académica de la UNED, a fin de servir de apoyo a la Enseñanza Superior y a colaborar al desarrollo cultural del entorno, así como otras actividades directamente relacionadas con los objetivos antes expresados que acuerde su Junta Rectora.
- b) Fines. Constituye el objeto de este consorcio asumir el sostenimiento y funcionamiento del Centro Asociado de la UNED en Málaga y, en concreto:

a) Facilitar el acceso a la Educación Superior de las personas que por su procedencia o situación laboral o familiar no puedan frecuentar las aulas universitarias, por lo que este Centro se compromete a:

-Admitir a los alumnos el ámbito geográfico que le haya sido asignado por la UNED, teniendo en cuenta las normas que sobre admisión de estudiantes sean de aplicación con carácter general para toda la Universidad.

-Ofrecer todas las enseñanzas que en cada momento se imparten en la UNED, estableciéndose anualmente un Plan de Actividades Docentes diseñado por los órganos académicos previstos en estos Estatutos o en el Reglamento de Organización y Funcionamiento que tenga el Centro Asociado, y que será supervisado por la Universidad de acuerdo a su normativa propia.

-Llevar a cabo las actividades de educación permanente y extensión universitaria y los programas y actividades especiales que apruebe la Junta de Gobierno de la Universidad.

b) Gestionar el mantenimiento y expansión el Centro Asociado de la UNED en Málaga así como aquellos centros comarcales que se establezcan en lo sucesivo dentro de esta provincia.

c) Recabar y distribuir los fondos necesarios para el sostenimiento de los centros asociados, llevando a cabo para ello las iniciativas oportunas a fin de obtener de la sociedad malagueña y de aquellas entidades públicas o privadas, así como de particulares, los medios necesarios para ello.

d) Llevar a cabo las obras de adaptación, en su caso, de la sede del Consorcio y sus aulas, oficinas y dependencias académicas.



e) Fomentar a través del Centro Asociado la investigación en la provincia.

f) Colaborar con el Ministerio, la Consejería de Educación y Ciencia, y con la Universidad de Málaga en cuanto redunde en beneficio de la enseñanza universitaria.

c) Funciones. Para el cumplimiento del objeto y de los fines expresamente señalados, se reconocen las siguientes Funciones al Consorcio:

a) La Constitución de la Junta Rectora como órgano de dirección, administración y representación del Consorcio.

b) La regulación de las normas de funcionamiento del mismo mediante la aprobación del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro.

c) La creación de nuevos servicios o de órganos consultivos.

d) El ejercicio de acciones judiciales y la representación procesal de los intereses del Centro Asociado.

e) La decisión sobre incorporación de nuevos miembros.

f) Enajenación y gravamen de Bienes.

g) La dirección de la gestión ordinaria del Centro Asociado en el modo previsto en los presentes Estatutos y en el citado Reglamento de Organización y Funcionamiento.

h) autorización de convenios o contratos necesarios para el funcionamiento del Centro Asociado.

i) dotación de profesores tutores y la elaboración del Plan Académico Docente de carácter anual.

j) Gestión del Personal de Administración y Servicios de acuerdo a lo previsto en la ley 40/2015, de 1 de octubre.

k) Las de naturaleza presupuestaria y de control del gasto del Centro Asociado en el modo previsto en el presente Estatuto y el Reglamento de Organización y Funcionamiento.

l) Aquellas otras que sean necesarias para el cumplimiento del objeto y fines del Consorcio.

El consorcio tiene la condición de medio propio (MP) de la UNED.

Artículo 9. Domicilio social. El Consorcio, a todos los efectos legales, estará domiciliado en el Edificio sito en la C/ Sherlock Holmes, 4, (Málaga- 29006).

Artículo 10. Locales e instalaciones del Centro Asociado.

1. El Centro Asociado se encuentra ubicado en la ciudad de Málaga. Dichos locales, destinados exclusivamente al Centro Asociado, cuentan con los espacios e instalaciones adecuados exigidos con carácter general por la normativa vigente.

2. El Centro Asociado deberá disponer de la infraestructura mínima que determine la Universidad en su normativa reguladora de los Centros Asociados.

En el caso de que las necesidades del Centro requieran una ampliación de sus locales los nuevos deberán contar, en todo caso, con la previa aprobación de la Universidad. Cualquier cambio que afecte a la ubicación del Centro, así como los posibles cambios parciales del lugar de alguna prestación docente, habrán de ser autorizados por los órganos competentes de la UNED.



Artículo 11. Ámbito territorial. El ámbito territorial del Centro Asociado comprende la provincia de Málaga.

El Centro Asociado, conforme a las normas de admisión aprobadas por el Consejo de Gobierno, se compromete a admitir a todos los alumnos que cursen las carreras y estudios tutorizados por el Centro y que residan en el ámbito territorial del mismo. También deberá admitir alumnos de otras zonas cuando la Universidad lo requiera y existan en el Centro medios y recursos suficientes para atenderlos.

La Junta Rectora del Consorcio podrá proponer a la Universidad la creación de aulas para facilitar los estudios de los alumnos que no residan en la zona donde el Centro Asociado tiene su sede. Estas aulas deberán ser previamente autorizadas por la Universidad. En los convenios suscritos y aprobados por la Junta Rectora para el establecimiento de aulas tendrán que consignarse la prestación docente y el presupuesto para cubrir la prestación.

CAPITULO 2. GOBIERNO DEL CONSORCIO

Artículo 12. Gobierno del consorcio. El gobierno del Consorcio corresponde a los siguientes órganos:

- La Junta Rectora.
- El presidente de la Junta Rectora.

Artículo 13. De la Junta Rectora.

1. Composición.

La Junta Rectora estará constituida, de conformidad con el artículo 2 del Real Decreto 1317/1995, de 21 de julio, y la expresa posibilidad de ampliación del número de representantes de las entidades financiadoras, por los siguientes miembros:

- a) 4 en representación de la UNED.
- b) 4 procedentes de las demás instituciones que financian el Centro, repartidos del siguiente modo: 2 representantes de la Excm. Diputación Provincial de Málaga, 1 representante por el Excmo. Ayuntamiento de Málaga y 1 representante por UNICAJA.
- c) El Director del Centro.
- d) El Representante de los Profesores Tutores del Centro.
- e) El Delegado de estudiantes del Centro.
- f) El Representante del Personal de Administración y Servicios del Centro.

Actuará como Secretario el del Centro Asociado, con voz pero sin voto.

En caso de que algún miembro de la Junta Rectora no pudiera asistir a una reunión programada, podrá designar representante con voz y voto.

2. Atribuciones.

La Junta Rectora asumirá las facultades que le correspondan como órgano de dirección, administración y representación ante terceros del Consorcio universitario titular del Centro Asociado a la UNED de Málaga y, entre otras, tendrá las siguientes competencias, todo ello de acuerdo a las Funciones reconocidas al mismo en el artículo 8 de este mismo texto:

- a) Proponer la modificación de los Estatutos que rijan el funcionamiento del Consorcio que, en todo caso, deberá ser aprobada por todas las instituciones consorciadas.



- b) Aprobar la incorporación de nuevas entidades.
- c) Proponer a la UNED la creación de aulas que, en cualquier caso, deberán ser autorizadas por ella.
- d) Acordar la implantación en el centro de nuevas enseñanzas regladas y no regladas, conforme a lo que se dispone en la legislación vigente, aprobando el gasto necesario a incluir en el presupuesto para la implantación de las nuevas enseñanzas regladas.
- e) Conceder subvenciones a otras entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, así como ayudas o becas a estudiantes, en el ámbito de sus objetivos.
- f) Aprobar el presupuesto anual y su liquidación, los estados de cuentas y la memoria anual, remitiéndolo a la UNED junto con el inventario existente al cierre del ejercicio.
- g) Aprobar los gastos extraordinarios y la aportación con la que contribuirá cada ente consorciado que, como principio general, se distribuirá en función de las posibilidades de cada uno; ello sin perjuicio de la ratificación que en su caso sea procedente.
- h) Adquirir, disponer, administrar y enajenar los bienes y derechos del Centro Asociado siempre que no supongan alteración de la voluntad y fines fundacionales.
- i) Aprobar los derechos o ingresos de cualquier clase procedentes de las actividades del Centro Asociado, de acuerdo a las normas de la UNED.
- j) Aprobar la modificación, en su caso, del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro Asociado, conforme a las directrices fijadas por el Consejo de Gobierno de la UNED.
- k) Aprobar los planes y proyectos de obras y servicios del Consorcio, su contratación cuando exceda de los límites establecidos en las bases de ejecución del Presupuesto y la determinación de su régimen de gestión.
- l) Acordar la firma de contratos con el personal directivo, administrativo y de servicios; sin perjuicio de las facultades que correspondan a la UNED en función de su reglamentación específica.
- m) Fijar el número y las condiciones económicas y laborales de todo el personal del Centro Asociado, con los límites en su caso derivados de lo dispuesto en el artículo 121 de la ley 40/2015, de 1 de octubre.
- n) Determinar anualmente, a propuesta del Director del Centro, las plazas de Profesores-Tutores que impartirán docencia en el Centro Asociado y efectuar las convocatorias para su selección de acuerdo con las directrices fijadas por el Consejo de Gobierno, así como la propuesta de nombramiento de los Profesores-tutores del Centro Asociado.
- o) Controlar y fiscalizar las actividades del Centro Asociado y de sus extensiones.
- p) Disolver y liquidar el Consorcio.

La Junta Rectora podrá delegar alguna de sus facultades mediante acuerdo expreso y para actos concretos. En todo caso serán indelegables aquellos acuerdos que requieran un quórum especial para su aprobación, la ratificación de los entes consorciados o que tengan carácter presupuestario o de control financiero.

3. Régimen de funcionamiento.

La Junta Rectora se reunirá al menos una vez al año en sesión ordinaria, convocando a sus miembros con un mínimo de 10 días hábiles de antelación, o de 6 días si fuera convocatoria extraordinaria.

Para la válida constitución de la Junta Rectora será necesaria la asistencia, en primera convocatoria, de la mayoría absoluta de los miembros que la componen y, en segunda convocatoria, la asistencia al



menos del presidente (o persona que le sustituya) y de dos vocales, debiendo ser al menos uno de ellos representante de la UNED.

4. Supuestos de mayorías cualificadas.

Será necesario el voto favorable de la mayoría absoluta de miembros con derecho a voto de la Junta Rectora del Consorcio para la adopción de los siguientes acuerdos:

- a) La propuesta de redacción o modificación de los Estatutos del Consorcio, que deberá ser ratificada por las instituciones firmantes del Convenio.
- b) La modificación del régimen ordinario de aportaciones y la aprobación de aportaciones o responsabilidades económicas extraordinarias.
- c) La aprobación y la modificación del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro Asociado o de los otros creados por el Consorcio.
- d) La creación de aulas.
- e) La implantación de nuevos estudios, carreras y otras enseñanzas a distancia.
- f) La aprobación de operaciones financieras o de crédito cuando su importe exceda del 25% de los recursos ordinarios del presupuesto.
- g) La disolución y la liquidación del Consorcio.

5. Ratificación de acuerdos.

Los acuerdos que supongan alteración de la voluntad inicial y los que impliquen aportación o responsabilidad económica extraordinaria, y en especial los señalados en las letras a), b), f) y g) del apartado anterior, tendrán que ser ratificados por los respectivos órganos de gobierno de las instituciones consorciadas, sin cuyo requisito no tendrán validez.

Artículo 14. Del presidente de la Junta Rectora.

La Presidencia de la Junta Rectora recaerá en el representante elegido por el conjunto de los miembros de las entidades que conforman el Consorcio y tendrá las siguientes atribuciones:

- a) La representación legal e institucional del Consorcio.
- b) Convocar, presidir, moderar, suspender y levantar las sesiones. Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del órgano.
- c) Asegurar el cumplimiento de las leyes, sin perjuicio de los deberes propios del secretario conforme al artículo 16 de la ley 40/2015, de 1 de octubre.
- d) Dirigir, ejecutar, supervisar e impulsar las actividades del Consorcio.
- e) Supervisar los aspectos no académicos de actividad del Consorcio, sin perjuicio de las competencias de dirección, supervisión, coordinación e impulso que correspondan a la UNED, a través de sus diversos órganos y unidades, respecto de la actividad académica.
- f) Ejercer el resto de funciones y facultades que le sean delegadas expresamente por la Junta Rectora.

Artículo 15. Del vicepresidente.

El vicepresidente suplirá al presidente en los casos de vacante, ausencia o enfermedad y cuando éste le delegue actuaciones concretas. El vicepresidente de la Junta Rectora será el representante de la Institución que así se acuerde por la propia Junta Rectora.



CAPITULO 3. RÉGIMEN FINANCIERO Y ECONÓMICO

Artículo 16. Financiación.

1. Régimen jurídico. El régimen de presupuestación, contabilidad y control del Centro Asociado a la UNED de Málaga, será el aplicable a la UNED, por estar adscrito a ella, sin perjuicio de su sujeción a lo previsto en la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. En todo caso, se llevará a cabo una auditoría de las Cuentas Anuales que será responsabilidad de la Intervención General de la Administración del Estado, conforme al artículo 237 de los Estatutos de la UNED, en relación con el artículo 122.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

Los informes que emita la Intervención General de la Administración del Estado en el ejercicio de dicha función serán incorporados a dichas cuentas anuales y enviados a la UNED para su unión a las de esta, sin perjuicio del régimen de gestión que pueda establecer la Junta Rectora.

2. Presupuesto anual. El Consorcio se compromete a la financiación de todos los gastos correspondientes al presupuesto anual ordinario de funcionamiento del centro asociado, esto es, todos los gastos de personal, locales, edificios, instalaciones y materiales; los de desplazamiento de profesores-tutores y otro personal del Centro para asistir a reuniones organizadas por la Universidad y los de desplazamiento de profesores de los Departamentos de la Universidad para participar en seminarios y convivencias dentro del Centro Asociado; así como becas y cualquier otro gasto consignado en el presupuesto ordinario del Centro.

Las entidades consorciadas se obligan a incluir anualmente en sus presupuestos ordinarios las partidas necesarias para subvencionar la totalidad de los gastos del Centro.

3. Financiación ordinaria procedente de la UNED. La Universidad Nacional de Educación a Distancia efectuará la aportación dineraria prevista para los centros asociados en el ordenamiento estatal (actualmente, en el Real Decreto 1317/1995, de 21 de julio) y en los Estatutos de la UNED y resto de su normativa propia. Esta financiación, de conformidad con el artículo 2.2 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, no estará incluida en el ámbito de aplicación de dicha ley.

4. Financiación ordinaria procedente del resto de entidades consorciadas. El resto de las instituciones que financian el Centro Asociado se comprometen a actualizar anualmente sus aportaciones económicas de acuerdo al criterio aprobado por la Junta Rectora. A estos efectos, dicha aportación será revisada sobre la consignada en el último presupuesto del Centro Asociado, garantizándose, en cualquier caso, un mínimo equivalente a la cantidad aportada en el ejercicio anterior:

Las subvenciones contempladas en esta estipulación deberán hacerse efectivas al inicio del ejercicio presupuestario y, en todo caso, no más tarde del mes de marzo. Todo ello de acuerdo con los trámites internos de cada una de las entidades que deberá consignar estas cantidades en sus Presupuestos anuales.

En caso de incorporación de una nueva entidad al Consorcio se requerirá acuerdo de la Junta Rectora en que se especifique la cuantía de su aportación ordinaria.

5. Otra financiación. El Consorcio podrá recibir de las entidades consorciadas o de terceros subvenciones adicionales a las aportaciones dinerarias ordinarias indicadas en este artículo.

6. Prohibición de establecer a los estudiantes pagos obligatorios distintos de los procedentes de la matrícula. El Centro Asociado no podrá percibir cantidad alguna de los alumnos matriculados en la Universidad por las enseñanzas regladas ni podrá imponer ningún tipo de actividades complementarias por las que hayan de desembolsar cantidad alguna. Tampoco podrá existir vinculación de ninguna clase entre el Centro y otras Entidades que proporcionen enseñanza a los alumnos, salvo autorización previa expresa de la UNED.

Artículo 17. Patrimonio del Consorcio.



1. El Consorcio será titular del patrimonio que se incorpora como anexo a estos Estatutos, pudiendo además, adquirir, poseer, administrar, gravar y enajenar sus bienes, con arreglo a la normativa establecida para la Administración pública que sea aplicable a la UNED.

2. No se considerarán patrimonio propio del Consorcio los bienes que puedan aportar las entidades que lo compongan si no tienen el carácter de transmisión en propiedad.

En particular, los bienes inmuebles propiedad de una de las administraciones o entidades consorciadas que sean puestos a disposición del consorcio mantendrán la titularidad de la administración o entidad de origen, salvo que expresamente se acuerde otra cosa.

Artículo 18. Ingresos del Consorcio.

Serán ingresos del Consorcio los siguientes:

a) Ingresos de derecho privado.

b) Los ingresos por prestación de servicios por la realización de actividades de su competencia.

c) Los procedentes de operaciones de crédito.

d) Aportaciones dinerarias ordinarias y extraordinarias de cualquier naturaleza provenientes de las entidades consorciadas o de otras administraciones públicas.

Artículo 19. Gestión del gasto.

1. Normativa interna. Corresponderá a Junta Rectora aprobar las normas internas de procedimiento y de gestión del gasto, regulando sus distintas fases así como el régimen de las modificaciones presupuestarias; todo ello, con sujeción a la normativa general aplicable y con observancia de lo dispuesto en el apartado siguiente.

2. Autorización y compromiso de gastos. Los gastos cuyo importe sea inferior al 5% del presupuesto podrán autorizarse y comprometerse por el Director, con la firma mancomunada del Administrador del Centro.

Corresponderá a la Junta Rectora autorizar y comprometer los gastos que superen dicha cantidad.

CAPITULO 4. DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO

Artículo 20. Del director. El Centro Asociado tendrá un director que será nombrado por el rector oída la Junta Rectora y con sujeción a los requisitos y procedimiento establecidos por la normativa de la UNED. La duración del mandato será de cuatro años y podrá ser renovado.

El Director, sin perjuicio de las competencias que correspondan específicamente a otros órganos, será el garante de la legalidad en el Centro.

Artículo 21. Funciones del director.

Entre otras, contenidas en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro, serán atribuciones del Director:

a) Ejercer la representación legal e institucional del Centro Asociado.

b) Adoptar cuantas medidas académicas, económicas y administrativas sean necesarias para el normal funcionamiento del Centro Asociado, dando cuenta de ellas a la mayor brevedad a la Junta Rectora.

c) Convocar y presidir el Claustro y el Consejo de Dirección del Centro.

d) Dirigir, coordinar y supervisar la actividad del Centro.



- e) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de los órganos de gobierno del Centro o de la Junta Rectora.
- f) Elaborar los proyectos de presupuestos de ingresos y gastos para su aprobación definitiva, si procede, por la Junta Rectora.
- g) Presentar a los órganos competentes la liquidación contable y presupuestaria de cada ejercicio fiscal para su aprobación, si procede.
- h) Supervisar el cumplimiento de las obligaciones de los profesores tutores.
- i) Ejercer la jefatura del personal del centro.
- j) Supervisar la elaboración de la memoria anual de actividades del Centro, que presentará a los órganos competentes.
- k) Disposiciones de efectivo, con firma mancomunada, en los términos y cuantías que establezca la Junta Rectora.

Artículo 22. De los subdirectores o directores adjuntos. El Centro podrá contar con la colaboración de uno o más subdirectores o directores adjuntos, cuyas atribuciones y procedimiento de nombramiento o nombramientos vendrán estipuladas en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro.

Artículo 23. Del secretario. El Centro Asociado tendrá un Secretario que, como cargo de confianza del director, será nombrado y cesado por este, que informará de su nombramiento a la Junta Rectora y al Vicerrectorado de Centros Asociados de la UNED. El Secretario del Centro Asociado lo será también de la Junta Rectora del Consorcio, asistiendo a sus reuniones con voz pero sin voto.

Artículo 24. Del administrador. El Centro podrá contar con un Administrador, cuyo procedimiento de nombramiento y atribuciones vendrán estipuladas en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro.

Artículo 25. Del personal de administración y servicios. El Centro Asociado contará con el personal de administración y servicios, necesario para atender la gestión administrativa y económica, que aseguren el correcto funcionamiento del Centro.

Este personal debe proceder exclusivamente de las Administraciones y entidades consorciadas. Su régimen jurídico será el de la UNED y sus retribuciones en ningún caso podrán superar las establecidas para puestos de trabajo equivalentes en aquella.

Excepcionalmente, cuando no resulte posible contar con personal procedente de las Administraciones participantes en el consorcio en atención a la singularidad de las funciones a desempeñar, la UNED podrá autorizar la contratación directa de personal por parte del consorcio para el ejercicio de dichas funciones.

El personal preexistente no procedente de las administraciones y entidades consorciadas podrá conservar su régimen de empleo actual, en tanto en cuanto no se oponga a lo establecido en la ley 40/2005, de 1 de octubre.

CAPITULO 5. RÉGIMEN ACADÉMICO

Artículo 26. Actividad académica. De conformidad con el artículo 67 de los Estatutos de la UNED, aprobados por el Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre, el Centro Asociado es una unidad de su estructura académica.

Consecuentemente, su actividad académica está sometida al régimen existente en la UNED y, específicamente, a las previsiones que respecto de los centros asociados contienen sus Estatutos y a las normas y directrices del Consejo de Gobierno, juntas de facultad y escuela, departamentos, profesores encargados de la docencia y demás órganos de la UNED en el ámbito de sus competencias respectivas.



Artículo 27. Gobierno y administración del centro.

1. El gobierno y administración del centro se ajustará a lo consignado en el Reglamento de Organización y Funcionamiento aprobado en su día.
2. El régimen interior del Centro dependerá de la Junta Rectora, que se regirá por el Reglamento de Organización y Funcionamiento vigente, ajustado a las directrices fijadas por el Consejo de Gobierno de la UNED. En el Reglamento se asegurará la debida participación de los profesores-tutores, de los alumnos y del PAS en los órganos colegiados.

Artículo 28. Profesores Tutores.

1. Para llevar a cabo sus labores docentes el Centro Asociado contará con Profesores-tutores.
2. La vinculación de los Profesores-tutores con el Centro Asociado será la establecida en la legislación vigente (RD 2005/86 de 25 de Septiembre).
3. Los Profesores-tutores habrán de reunir los requisitos previstos por la legislación vigente y serán nombrados por el Rector de la UNED.
4. Las condiciones del concurso y la selección de tutores se atenderán a las disposiciones y normas emanadas del Consejo de Gobierno de la UNED y de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente.
5. Los Profesores-tutores deberán cubrir un mínimo de horas fijado por la UNED, respetando la legislación sobre incompatibilidades.
6. Para el nombramiento de los Profesores-tutores será requisito indispensable que los candidatos se comprometan por escrito a asistir a las reuniones que se convoquen por el Departamento correspondiente de la UNED. Los profesores-tutores no estarán obligados a asistir a más de dos reuniones por curso.
7. Los Profesores-tutores no podrán ejercer ninguna actividad docente dirigida a los alumnos de la UNED en Centros no autorizados por la Universidad. El Centro Asociado hará lo necesario para hacer respetar esta prohibición.

Artículo 29 Servicio de librería. El Centro asegurará el servicio de librería a los estudiantes. Este servicio podrá ser prestado mediante gestión y distribución directas por el propio centro o a través de la Librería Virtual de la UNED, en cuyo caso incorporará en su página web los enlaces correspondientes.

En caso de prestación del servicio mediante otras fórmulas de gestión que incluyan convenios o contratos con terceros, éstos no podrán prorrogarse.

Artículo 30. Actividades culturales y de Extensión Universitaria.

1. La programación de todo tipo de actividades de Extensión Universitaria que se organicen en el Centro Asociado se ajustará a las normas establecidas por el Consejo de Gobierno de la Universidad. En cualquier caso, la Junta Rectora deberá aprobar los presupuestos correspondientes a este tipo de actividades.
2. El Centro llevará a cabo los programas especiales aprobados o que apruebe el Consejo de Gobierno para impartir cursos de especialización procedentes de acuerdos con instituciones públicas (centros penitenciarios, programas de especialización, etc.). Asimismo, darán apoyo a los programas de enseñanzas abiertas y de formación del profesorado.

Artículo 31. Control de eficacia y supervisión continua. El consorcio estará sometido al control de eficacia y supervisión continua por parte de la UNED, según ésta establezca en la correspondiente



norma interna, y sin perjuicio de las auditorías que efectúe en su caso la Intervención General de la Administración del Estado.

A este efecto, la UNED podrá inspeccionar o realizar auditorías en el Centro en cualquier momento.

El Centro vendrá obligado a remitir anualmente a la UNED, en los plazos que a tal efecto se fijen con carácter general, una memoria de las actividades realizadas durante el curso, su presupuesto, la liquidación y, demás documentos que la UNED pueda exigir. Esta documentación, deberá ajustarse a los modelos que la UNED establezca.

CAPITULO VII. DE LA SEPARACIÓN Y DISOLUCIÓN DEL CONSORCIO

Artículo 32. Derecho de Separación. El derecho de separación podrá ser ejercido por cualquiera de las partes en los términos previstos en el artículo 125 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. En caso de que el ejercicio del derecho de separación no conlleve la disolución del Consorcio se estará a lo dispuesto en el art. 126 de la referida ley.

Artículo 33. Disolución del Consorcio.

1. El Consorcio se disolverá por alguno de los siguientes motivos:

a) Por disposición legal.

b) Por imposibilidad de cumplir sus fines y objetivos.

c) Por insuficiencia de medios económicos.

d) Por el ejercicio del derecho de separación por la UNED o por cualquiera de los otros miembros, salvo que en este último caso la UNED acuerde con los miembros que no deseen separarse, la continuidad en los términos y con las condiciones y efectos previstos en el artículo 127 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

2. En caso de disolución del Consorcio, cada entidad asumirá la responsabilidad del personal que de su plantilla estuviera adscrito al Centro Asociado.

3. El destino de los bienes inventariables será el siguiente: si fueron aportados por una sola entidad fundadora, revertirán a ella automáticamente y quedarán desafectados si es un ente público. Si fueron aportados por varias entidades y formasen un conjunto inseparable, corresponderán a quien hubiera aportado la porción de mayor valor, pero debiendo indemnizar a las demás por el importe del valor de sus aportaciones actualizadas al momento de la liquidación, entendiéndose, en su caso, desafectados.

4. No obstante, antes de que las entidades consorciadas decidan la disolución de la Junta Rectora, el Consejo de Gobierno de la UNED, a la vista de la disponibilidad de sus recursos económicos y previo informe de viabilidad económica, podrá continuar con las actividades administrativas y docentes en el Centro Asociado si considerase que puede hacer frente a todos los gastos.

Disposición final. Los presentes Estatutos no sólo obligan al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, así como a los Estatutos por los que se rija la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Disposición Derogatoria. A la entrada en vigor de estos Estatutos quedarán derogadas cuantas disposiciones del mismo o menor rango se opongan a los mismos, de manera expresa, los estatutos, acuerdos en relación a los mismos, así como los preceptos del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro que, en su caso, requerirán una adaptación al tenor del presente texto.”

En el expediente figura informe favorable del Servicio de Asistencia a los Municipios al que se adhiere la Secretaria General, e informe de conformidad del Interventor General.



Conocido el contenido de la anterior propuesta, el Pleno por mayoría formada por veinte votos a favor (quince del Grupo Popular, dos del Grupo IULV-CA-Para la Gente, dos del Grupo Ciudadanos, y uno del Grupo Málaga Ahora), diez abstenciones del Grupo Socialista, y ningún voto en contra, acuerda su aprobación.

Y para que conste y surta los efectos que procedan, expido la presente certificación con las advertencias y salvedades contenidas en el artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, con el Vº Bº del Ilmo. Sr. Presidente, en Málaga a dos de febrero de dos mil diecisiete.

Vº Bº
LA PRESIDENCIA

La Vicepresidenta 2ª
Ana Carmen Mata Rico



